

Tohá defiende estrategia de La Moneda para enfrentar crisis en San Antonio

En la reunión del comité político ampliado de este lunes la ministra explicó la fórmula del Ejecutivo para evitar el desalojo de los 10 mil pobladores que ocupan ilegalmente el terreno ubicado en la Región de Valparaíso.



► Uno de los focos de debate del comité político ampliado fue la orden judicial para desalojar la megatoma de San Antonio.

David Tralma, Cristóbal Fuentes y Carlos Agurto

Este lunes, uno de los focos de debate del comité político ampliado que semanalmente reúne a los ministros y a los presidentes de los partidos oficialistas fue la orden judicial para desalojar la megatoma de San Antonio que, originalmente, se iba a realizar este jueves pero que se postergó tras el acuerdo al que llegaron los propietarios del terreno con el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y el subsecretario del Interior, Luis Cordero.

Al iniciar la reunión del comité político de este lunes estaba sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno no consiguiera un entendimiento con los propietarios vinculados

a la Inmobiliaria San Antonio, lo que obligaba al Ejecutivo a ordenar el desalojo de las 10 mil personas que viven de forma irregular en el terreno de 256 hectáreas.

Ante ese escenario empezó a crecer la presión del oficialismo que abogó públicamente por evitar la expulsión con carabineros.

El fin de semana el Partido Comunista de Viña del Mar emitió un comunicado afirmando que “el desalojo es una práctica punitiva contra las personas y las personas en toma”. En la misma línea se pronunciaron los diputados de ese partido Luis Cuello y Lorena Pizarro.

Ante ese marco, y mientras se desarrollaba la negociación de Montes y Cordero con los propietarios del terreno ubicado en Cerro Centinela, la ministra del Interior, Ca-

rolina Tohá, fue tajante al señalar a los timoneles del sector que el gobierno no entraría en desacato ante la justicia y que la forma de evitar el desalojo era convencer a los propietarios de llegar a un acuerdo para que les vendan a los pobladores a través de cooperativas.

En la misma línea de lo que ha dicho el ministro Montes, la jefa de gabinete explicó que el mandato judicial permite una desalojo paulativo de las 4 mil familias que habitan en la toma.

Por esto, en la junta la preocupación del oficialismo seguía latente, lo que se expresó en la reunión con el gobierno, que fue presentado por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y el titular de Hacienda, **Mario Marcel** (Ind.-PS).

Los representantes de los partidos fueron Andrés Couble (FA), Lautaro Carmona (PC), José Toro (PPD), Leonardo Cubillos (PR), Efrén Osorio (AH) y Jaime Mulet (FRVS). Antes que cualquiera de ellos pudiera ahondar en la situación de la toma de “Edén Lajari-lla”, fue la propia ministra Tohá quien puso el tema sobre la mesa.

De acuerdo a los presentes, la jefa del gabinete expuso el proceder del gobierno de Boric ante la orden de desalojo y dio cuenta de que esto implicaba medidas que se estaban conversando con los afectados, que se verá por etapas, y que pasa por alcanzar un acuerdo en línea con las cooperativas que impulsa el Ejecutivo para solucionar la crisis.

En palabras de Lautaro Carmona, Tohá hizo “una exposición sobre el tema y cómo se podría abordar sobre la base que, lo primero, es lo que piensen los pobladores”. Efrén Osorio agregó que el gobierno hizo hincapié en que “es un tema en el cual hay un mandato judicial que debe ser cumplido, se abordará con diversidad de soluciones y, dada la magnitud, con la gradualidad que sea necesaria”.

Tras la exposición de Tohá, se dio un espacio para que los presidentes de partido pudieran referirse al tema. Uno de los que hablaron fue Carmona, quien manifestó la preocupación por seguir monitoreando un tema que ha generado revuelo al interior del partido que él lidera, para que así el tema no se transforme en un problema.

Y es que en el PC no son pocos los que han salido a presionar al gobierno para evitar a toda costa un desalojo por la fuerza, más allá que esta medida se aplique de forma “gradual”, como han defendido en Palacio. Esto, porque la imagen de las fuerzas policiales - escasas para este tipo de operativos - es algo sumamente incómodo para ellos.

El sábado, el histórico arquitecto comunista Miguel Lawner expresó que “si el gobierno lleva a cabo el desalojo, nos vamos a defender. Yo voy a estar ahí presente”.

Consultado al respecto, Carmona dijo a **La Tercera** que “todos conocemos el papel que ha jugado en la historia respecto del derecho a la vivienda y las propuestas, sobre todo para los sectores más postergados. Es una manifestación valórica del punto de vista de la solidaridad con quienes están viviendo ese trance. Con su presencia está indicando que hay que buscar todos los caminos que permitan que el problema de la toma que ha sido declarada ilegal tenga una solución con distintas fórmulas”.

Desde la tienda que preside Carmona también salió el comunal de Viña del Mar, vía comunicado, a expresar que “la solución a las tomas no es el desalojo ni la criminalización de las familias. Actualmente el Estado cuenta con la herramienta constitucional de expropiación con fines de utilidad pública”. El diputado Luis Cuello (PC), representante de la zona, añadió posteriormente que “a mi juicio, es bastante erróneo desalojar a 10 mil personas, sería un desastre desde el punto de vista humanitario”. ●